

Democracia en tensión: descenso del apoyo ciudadano, deslegitimación institucional y libertad de prensa en Costa Rica

Resumen

Costa Rica ha sido una de las democracias más estables en América Latina desde 1953. No obstante, la elección de 2022 evidenció un giro hacia discursos populistas (Cascante y Muñoz, 2023), producto de la transformación del sistema de partidos. Entre los signos de desgaste democrático destacan la corrupción (Casas-Zamora, 2024), los constantes ataques a la institucionalidad (Köker *et al*, 2025), la disminución del apoyo ciudadano a la democracia (Carlin, 2006; Schiumerini y Lupu, 2021) y el deterioro de la libertad de prensa (Casas-Zamora, 2024). Aunque se mantienen elecciones libres y competitivas, el actual presidente enfrenta acusaciones por corrupción. En 2023, solo el 55.9% de la ciudadanía apoyaba la democracia, según Latinobarómetro. Desde 2022, la libertad de prensa y expresión se ha visto afectada por ataques reiterados desde el Ejecutivo. Este artículo argumenta que estas son señales de una "democracia en tensión" y analiza el caso costarricense con base en datos de LAPOP, índices de libertad de prensa y notas periodísticas.

Y Palabras clave: democracia, populismo, Costa Rica, libertad de prensa, apoyo ciudadano.

Democracy Under Strain: Declining Public Support, Institutional Weakening, and Press Freedom in Costa Rica

Abstract

Costa Rica has been one of the most stable democracies in Latin America since 1953. However, the 2022 election revealed a turn toward populist discourse (Cascante & Muñoz, 2023), driven by the transformation of the party system. Signs of democratic deterioration include corruption (Casas-Zamora, 2024), constant attacks on institutions (Köker *et al*, 2025), declining public support for democracy (Carlin, 2006; Schiumerini & Lupu, 2021), and the deterioration of press freedom (Casas-Zamora, 2024). Although free and competitive elections persist, the current president faces corruption accusations. In 2023, only 55.9% of citizens supported democracy, according to Latinobarómetro. Since 2022, freedom of the press and expression has been affected by repeated attacks from the Executive. This article argues that these are signs of a "democracy under tension" and analyzes the Costa Rican case based on LAPOP data, press freedom indexes, and journalistic reports.

Keywords: democracy, populism, Costa Rica, press freedom, public support.

Introducción

En América Latina y específicamente en Centroamérica, diversos estudios han documentado la presencia de regímenes autoritarios o democracias consolidadas, pero en *déficit* (Ovares, 2021). En este contexto regional, Costa Rica se ha mantenido como la democracia más longeva y estable en la región: desde 1953 se han celebrado de manera ininterrumpida elecciones presidenciales y legislativas (Alfaro, 2023). Por un periodo prolongado, el sistema de partidos se caracterizó por el bipartidismo dominado por el Partido de Liberación Nacional y la oposición, sin embargo, este panorama cambió en las últimas dos décadas (Alfaro, 2023; Cascante y Lara, 2020).

A pesar de esta trayectoria de estabilidad institucional, Costa Rica ha experimentado transformaciones como el aumento del abstencionismo, la persistencia de la crisis económica, el aumento de la inseguridad ciudadana, los escándalos de corrupción, la profundización de la desigualdad y el deterioro progresivo de la confianza institucional (Casas-Zamora, 2024; Ovares, 2021). En este contexto, el ascenso de Rodrigo Chaves en la elección presidencial de 2022 representa una ruptura con el patrón de estabilidad democrática costarricense. Su triunfo se ha categorizado como la emergencia de un liderazgo que combina conservadurismo en temas sociales con liberalismo económico, un estilo confrontativo y una convergencia con las tendencias autoritarias y populistas observables en líderes como Trump, Bolsonaro o Bukele (Cascante y Guzmán, 2022; Cascante y Muñoz, 2023).

La emergencia de este liderazgo es característico de un proceso de erosión democrática, término que, de acuerdo con el marco conceptual desarrollado por múltiples investigadores (Del Tronco y Monsiváis-Carrillo, 2020; Laebens y Lührmann, 2023; Lührmann y Lindberg, 2019), alude al debilitamiento o declive progresivo de las características inherentes a un régimen democrático, sin consideración de su nivel previo de consolidación institucional. En contraste con las rupturas abruptas propias de los golpes militares clásicos, esta dinámica opera de forma intermitente y puede evidenciarse tanto en sistemas con rasgos autoritarios como en democracias consolidadas.

El artículo argumenta que el caso de Costa Rica no constituye necesariamente una "erosión democrática", sino una "democracia en tensión", y tiene como objetivo caracterizar este fenómeno mediante el análisis teórico y empírico del deterioro de la libertad de prensa, la deslegitimación institucional y el descenso en el apoyo democrático. La libertad de prensa como característica esencial de los regímenes democráticos favorece el acceso a la información y la participación de diversos sectores de la sociedad (Fitriana *et al*, 2023); sin embargo, se ha visto obstaculizada sistemáticamente por acciones del gobierno que van desde el acoso hasta la persecución y violencia a personas comunicadoras, la censura, el cierre de medios de comunicación (Kenny, 2020). La deslegitimación institucional se manifiesta a través de ataques retóricos y verbales contra las instituciones y no buscan generar cambios positivos mediante crítica constructiva, sino que operan como "saboteadores de normas" cuyo objetivo es erosionar el apoyo público (Köker *et al*, 2025). Finalmente, el apoyo a la democracia experimenta un deterioro que se refleja en la dimensión difusa, es decir, en las actitudes que permiten a los ciudadanos aceptar o tolerar decisiones políticas (Easton, 1953) y resulta de la confluencia de factores políticos, económicos y sociales.

A continuación, el artículo se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se discuten los estudios sobre la democracia en tensión en Costa Rica. Seguidamente, se plantea el argumento del artículo. En tercer lugar, se presenta la evidencia que respalda el argumento. Posteriormente se discute la evidencia presentada a la luz del argumento y se concluye.

Libertad de prensa, deslegitimación institucional y apoyo a la democracia en Costa Rica

La relación entre libertad de prensa y democracia es un aspecto clave para comprender el funcionamiento democrático en Costa Rica. En una democracia, los medios de comunicación desempeñan un papel esencial al difundir, replicar y facilitar el debate de ideas (Garro y Solís, 2022). Existe un consenso en la literatura en que la libertad de prensa conlleva necesariamente la consideración de las condiciones que posibilitan el pleno ejercicio de la ciudadanía (Garro y Solís, 2022), particularmente el derecho al acceso a la información (Vargas y Brenes, 2012). Las investigaciones han demostrado que el acceso efectivo a la información puede contribuir a la conformación de una "ciudadanía crítica". Lo anterior implica no solo la existencia formal de la libertad de prensa, sino también las condiciones que permitan su ejercicio efectivo. No obstante, el panorama actual revela una brecha entre estos principios normativos y su implementación práctica.

Actualmente en Costa Rica, Martínez y Rodríguez (2022) con datos de una encuesta elaborada para varios países centroamericanos, identifican evidencia sobre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, "llamando a la prensa canalla a todo aquel que le cuestiona sus actitudes públicamente" (Martínez y Rodríguez, 2022, p. 20; véase también Pruitt, 2023). Esta dinámica de confrontación con los medios ha sido analizada en profundidad por Garro y Solís (2022), quienes examinan las condiciones de seguridad enfrentadas por las personas comunicadoras. Mediante la aplicación de un instrumento cuantitativo, las autoras evalúan diversos indicadores relacionados con el ejercicio libre y seguro de la profesión periodística. Sus hallazgos revelan que el 34.9% de los encuestados considera haber sido expuesto a situaciones de hostigamiento, el 35.5% a amenazas y el 33.9% a vigilancia.

La perspectiva de género añade una dimensión adicional a este panorama. Söderberg y Schumacher (2022) aportan evidencia cualitativa sobre el acoso laboral experimentado por las mujeres periodistas. Su investigación revela que aproximadamente la mitad de las participantes practican autocensura como mecanismo de respuesta al hostigamiento, fenómeno que las autoras conceptualizan como un "efecto paralizante" (chilling effect) que restringe la pluralidad de voces en el espacio público. El estudio establece una conexión directa entre el discurso presidencial de "prensa canalla" y la intensificación del acoso hacia las comunicadoras, evidenciando la retórica política divisiva en prácticas concretas de erosión de la libertad de prensa.

Esta situación refleja una tendencia más amplia de deterioro democrático caracterizada por intentos sistemáticos de restringir la libertad de prensa y la independencia judicial. Casas-Zamora (2024) argumenta que esta preocupación encuentra respaldo en indicadores internacionales: durante 2023, Costa Rica experimentó un retroceso de 15 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa y una caída de 11 lugares en el indicador de Gobierno Representativo de International IDEA. El autor identifica que el agravamiento de los desafíos democráticos del país

se relaciona con múltiples dimensiones: el incremento del abstencionismo electoral, la persistencia de la crisis económica, el aumento de la inseguridad ciudadana, los escándalos de corrupción, la profundización de la desigualdad y el deterioro progresivo de la confianza institucional (Casas-Zamora, 2024).

Al deterioro de la libertad de prensa también se suma deslegitimación institucional: ataques directos de la gestión de Chaves hacia la institucionalidad de Costa Rica. Méndez-Castellanos (2025) analiza notas e informes nacionales durante cuatro meses y muestra conflictos del presidente con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República. El autor señala que, desde 2022, la institucionalidad democrática ha enfrentado situaciones críticas a partir de retrocesos en los logros sociales que se habían alcanzado históricamente: Costa Rica es uno de los países de la OCDE que menos invierte en seguridad social, protección social, educación y salud (Méndez-Castellanos, 2025). Si bien el deterioro ha sido gradual desde antes de 2022, actualmente se caracteriza por el conflicto político y la crisis de gobernabilidad, desencadenando un ambiente de polarización (Méndez-Castellanos, 2025).

El panorama descrito también se acompaña de transformaciones en el respaldo ciudadano hacia la democracia en el país. Las tendencias de erosión del apoyo democrático se han manifestado de manera generalizada en América Latina, incluyendo a Costa Rica dentro de este patrón regional. Mientras que la disminución alcanzó 20 puntos porcentuales en Argentina, Colombia, República Dominicana y Jamaica; Costa Rica, Panamá y Paraguay experimentaron disminuciones superiores a los 10 puntos porcentuales (Schiumerini y Lupu, 2021).

Alfaro, Seligson y Zechmeister (2014) establecen una relación significativa entre el apoyo a la democracia y la tolerancia política, así como entre el respaldo democrático y la estabilidad del sistema democrático. No obstante, el análisis comparativo con los niveles registrados en 2010 revela una reducción sistemática del indicador durante 2012 y 2014, evidenciando que el apoyo a la democracia no se encuentra exento de predisposiciones autoritarias (Mora, Solís y Soto, 2014). Asimismo, la evidencia empírica demuestra que el deterioro del apoyo democrático ha sido significativamente menor entre la población joven en comparación con los grupos etarios de mayor edad (Treminio y Pignataro, 2015; Pignataro, Treminio y Chavarría-Mora, 2021).

En este contexto, Ovares-Sánchez (2021) identifica un rasgo del panorama democrático en Costa Rica: un incremento progresivo de la insatisfacción ciudadana hacia la democracia, lo que genera una incongruencia entre la demanda ciudadana por un sistema democrático funcional y la capacidad institucional para satisfacer dichas expectativas. Esta disonancia se manifiesta en la disminución de los niveles de satisfacción democrática, configurando lo que la literatura especializada denomina "déficit democrático" (Norris, 2011).

En síntesis, la literatura especializada evidencia que Costa Rica experimenta un proceso de democracia en tensión, caracterizado por el deterioro de la libertad de prensa, el ataque a las instituciones y la disminución del apoyo ciudadano hacia la democracia. Esta convergencia de factores configura un escenario de déficit democrático que, si bien se enmarca en las tendencias regionales latinoamericanas, presenta particularidades específicas del contexto costarricense que ameritan un análisis profundo.

Argumento: las tres señales de una democracia en tensión

Deterioro de la libertad de prensa

La libertad de prensa refiere a la autonomía de los medios de comunicación frente a la interferencia política o la censura (Kenny, 2020). Esta autonomía constituye una característica relevante para la democracia debido a la capacidad que deben tener los medios de comunicación para criticar las acciones y políticas del gobierno (Craft, 2010). Van Belle (2000) señala que un ambiente de libertad de prensa implica que las personas comunicadoras puedan cuestionar a las élites políticas y económicas -nacionales y locales- de manera segura. Fiss (1994), bajo una concepción ideal, argumenta que el mismo Estado puede ser un aliado de la libertad de prensa ya que tendría que impedir la exclusión que surge cuando la libertad absoluta margina voces minoritarias en sistemas desiguales.

En una democracia, por su parte, los medios de comunicación deberían cumplir cinco funciones (Cook, citado por Craft, 2010): representación, deliberación, resolución de conflictos, rendición de cuentas y diseminación¹. Los primeros tres, señala Craft (2010) refieren a al foro que propician los medios para que las personas de la sociedad civil sean escuchadas, debatan sus ideas y se puedan resolver problemas. La rendición de cuentas, se refiere al papel de la prensa en monitorear las acciones de quienes están en el poder, especialmente cuando estas contradicen estándares legales o éticos (Kovach y Rosenstiel, 2007). En efecto, la prensa funciona como un control institucional sobre la integridad gubernamental, proporcionando un mecanismo descentralizado para supervisar a los agentes (el gobierno) en nombre de los principales (el público) (Kenny, 2020). Por último, la diseminación refiere a brindarle a los ciudadanos la información que necesitan para participar efectivamente en la toma de decisiones sobre asuntos públicos (Craft, 2010).

Bajo estos supuestos, se sigue entonces que el modelo de prensa en un régimen democrático es aquel que provee las oportunidades para que todas las personas participen (Fitriana *et al* 2023) y considera como una obstrucción para la libre prensa, cualquier tipo de interferencia gubernamental (Waisbord, 2020). Esta obstrucción implica acciones del gobierno que van desde el acoso hasta la persecución y violencia a personas comunicadoras, la censura, el cierre de medios de comunicación y la priorización de los medios públicos nacionales sobre los medios privados (Kenny, 2020). Tsui (2015) señala que las técnicas más contemporáneas como el uso de “trolls” de internet para silenciar y amenazar a críticos del gobierno también se consideran parte del detrimento de la libertad de prensa.

Por tanto, el deterioro de la libertad de prensa constituye una señal del debilitamiento democrático porque socava las funciones esenciales que los medios deben cumplir en una democracia debilitando los mecanismos de control institucional sobre el gobierno y restringiendo el espacio para el cuestionamiento crítico de las élites políticas y económicas que caracteriza a un sistema democrático.

¹ Wiggins (1942) señala tres funciones de la prensa en la democracia moderna. 1) Vigilancia, es decir la prensa como “censura” del gobierno. 2) Informativa, para relacionar e interpretar las noticias con precisión, completitud y justicia. 3) Función social, como sustitución del conocimiento colectivo.

Deslegitimación institucional

El artículo propone que los ataques a las instituciones de un líder político, que se ha visto involucrado en actos de corrupción, en un régimen democrático constituyen una estrategia deliberada de deslegitimación institucional². Los argumentos sobre la deslegitimación institucional se relacionan estrechamente con el populismo contemporáneo: “El populismo instrumentaliza las instituciones, las pone a su servicio. Y lo hace irrumpiendo su correcto funcionamiento, banalizando la actividad que en ellas se lleva a cabo (...)” (Recio y Vidal, 2023: 160). Köker *et al* (2025) añaden que, en la práctica política, los líderes populistas no rechazan como tal las constituciones políticas, sino que realizan un esfuerzo en desmantelar las instituciones que obstaculizan la voluntad popular. Ejemplo de lo anterior son instituciones como el Poder Judicial ya que casi siempre está equipado con el derecho de invalidar leyes aprobadas por la legislatura electa y, por tanto, puede presentar un obstáculo para la implementación de cualquier agenda política.

¿Cómo se caracterizan las estrategias de deslegitimación? Según Köker *et al* (2025) son campañas sistemáticas que van más allá de la crítica constructiva propia del debate democrático. Para los autores, se manifiestan a través de ataques retóricos y verbales contra las instituciones y no buscan generar cambios positivos mediante crítica constructiva, sino que operan como "saboteadores de normas" cuyo objetivo es erosionar el apoyo público. Señalan que cada ataque vincula la crítica a la institución con una narrativa superior de fracaso y la necesidad de cambios o reemplazo del sistema actual.

Arauz y Casullo (2023) analizan el discurso de Rodrigo Chaves a partir de algunos rasgos populistas como la presencia del daño, del traidor, del enemigo, de un héroe, de malos modales y de narración autobiográfica. Analizan las intervenciones del presidente y muestran que su traidor interno son las “argollas” o los “mismos de siempre” y utiliza como mito orientado al pasado su frase “volver a hacer de Costa Rica el país más feliz del mundo”. Para los autores, el daño son los “privilegios” que, según el discurso presidencial, han configurado un sistema excluyente en detrimento del interés general. Tales calificativos permitieron a Chaves señalar como culpables tanto a sectores empresariales favorecidos fiscalmente como, especialmente, a la clase política representada por los partidos con experiencia de gobierno: Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, incluyendo la gestión del expresidente Alvarado.

Con base en lo anterior, el artículo propone que Rodrigo Chaves, como líder populista, emplea efectivamente estas estrategias de deslegitimación institucional que van en detrimento del sistema democrático costarricense. Esta retórica populista de deslegitimación es una señal más de la

² Monsivais (2023) propone un concepto más amplio de repertorio autoritario: “conjunto de discursos, comportamientos, decisiones, iniciativas y políticas públicas que transgreden, debilitan, reducen o eliminan el ejercicio de libertades ciudadanas, la rendición de cuentas democrática o el gobierno de la ley. En contraste, afianzan la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la configuración y el ejercicio del poder estatal y la autoridad gubernamental. Los repertorios autoritarios subvierten la democracia en la medida en que convierten a las normas e instituciones de control y rendición de cuentas democráticos en meros tinglados decorativos, instrumentos al servicio del poder ejecutivo (p15).

democracia en tensión, ya que debilita los mecanismos de control, rendición de cuentas y separación de poderes.

Apoyo ciudadano

El apoyo ciudadano hacia la democracia se ha teorizado desde múltiples perspectivas. Easton (1953) establece una distinción crucial entre el apoyo difuso y el apoyo específico. Mientras que el primero se refiere al largo plazo y se compone de actitudes favorables que permiten a los ciudadanos aceptar o tolerar decisiones políticas, por el contrario, el apoyo específico implica la evaluación del desempeño a corto plazo o de acciones puntuales. En este marco, el apoyo a la democracia como mejor sistema político posible, en comparación con otras formas de gobierno, se concibe como parte del apoyo difuso.

Ahora bien, ¿qué factores inciden en el apoyo a la democracia? Para abordar esta pregunta, el presente artículo propone tres tipos de explicaciones con base en la literatura. En primer lugar, las explicaciones económicas, tales como la satisfacción con la situación económica personal. En segundo lugar, las explicaciones sociales, que incluyen la percepción de corrupción y de seguridad. Finalmente, las explicaciones políticas, como la aprobación presidencial, el respeto por las instituciones y la participación política.

En la línea de la explicación económica, Amri (2023) evalúa el efecto de las condiciones económicas en el apoyo a la democracia en Oriente Medio y el Norte de África. Sus hallazgos revelan que a mayor producto interno bruto per cápita, la ciudadanía tiende a mejorar su actitud respecto a la democracia. En ese sentido, Carlin (2006) señala que la desigualdad y la pobreza tienen efectos negativos en el apoyo expresado hacia la democracia. Alister, Cea y Guerrero (2015) estudian América Latina y argumentan que existe un consenso en la literatura sobre el vínculo entre la democracia y el nivel de desarrollo: el apoyo a la democracia aumenta conforme aumenta el nivel de ingresos. Sin embargo, al tomar en cuenta las evaluaciones económicas de las personas, si bien la evaluación positiva de la economía contribuye a mejorar el apoyo a la democracia (Booth y Seligson, 2009), Alister *et al* (2015) señalan que el impacto en el apoyo a la democracia es mayor entre los países de altos ingresos que en países de bajos ingresos.

Respecto a los factores sociales, experimentar corrupción puede socavar el apoyo a la democracia ya que debilita la confianza ciudadana en los actores políticos, las instituciones o el sistema de gobierno (Seligson, 2008 citado en Salinas y Booth, 2011). Salinas y Booth (2011), citando a Cruz (2008) y Seligson (2000): sostienen que en la medida en que los ciudadanos consideran al gobierno responsable de cumplir el contrato social manteniéndolos seguros, la experiencia de corrupción política o ser víctima de delitos bajo la democracia debería erosionar la lealtad ciudadana hacia las prácticas democráticas. Desde esta perspectiva teórica, se asume ampliamente que quienes son victimizados por funcionarios públicos corruptos o criminales podrían perder la fe en la democracia y sus beneficios.

Sin embargo, estos autores señalan que la experiencia latinoamericana ha demostrado ser compleja y matizada (Salinas y Booth, 2011). Específicamente, estudios comparativos muestran que se debe diferenciar entre la percepción de seguridad y haber sido víctima de un crimen (Malone, 2010). De manera similar, ser víctima directa de corrupción también ha tenido poco efecto en las normas

democráticas. En contraste, la percepción de corrupción generalizada sí disminuye significativamente las actitudes democráticas (Almeida y Casalecchi, 2025).

Según Morales Quiroga (2009), aunque la percepción de corrupción efectivamente daña la satisfacción con el régimen democrático—y esta satisfacción se encuentra estrechamente asociada con los niveles de legitimidad—el impacto de la corrupción sobre la legitimidad democrática no opera de manera estrictamente directa. Esto sugiere que existen mecanismos intermedios y variables moderadoras que condicionan la relación entre la percepción de corrupción y el apoyo ciudadano al sistema democrático.

En relación con los factores políticos, Vairo (citado por Alister *et al*, 2015) señala que la falta de participación política traducida en el voto implica la existencia de lo que denomina “demócratas insatisfechos”, es decir, personas que probablemente no se sienten representados y que, por ello, tienen opiniones negativas sobre el funcionamiento del régimen. Sendra y Bohigues (2022) plantean que la aprobación presidencial en América Latina puede constituir una fuente de pertenencia grupal entre los ciudadanos, generando una división entre grupos internos (*ingroups*) y grupos externos (*outgroups*). La teoría sobre la aprobación presidencial muestra que existen ciclos en los cuales los presidentes pierden o ganan popularidad (Carlin *et al*, 2018) por lo que sería fundamental evaluar en qué momento de estos ciclos se pregunta sobre el apoyo a la democracia. Moreno y Osorio (2022) evalúan el efecto de la aprobación del gobierno en los indicadores de apoyo ciudadano a la democracia en cuatro países de la región andina y sus resultados muestran que el apoyo ciudadano se ve más afectado por las posiciones políticas de las personas.

Por último, en cuanto al respeto por las instituciones, la literatura se ha enfocado en estudiar la confianza en las instituciones: a mayor confianza política se relaciona con el ejercicio del voto y la participación política formal (Kim, 2014), lo cual podría incidir también en el apoyo a la democracia. Por su parte, Peralta (2013) aborda los determinantes del nivel de apoyo popular hacia los regímenes políticos. El autor identifica dos enfoques principales para responder esta cuestión: uno que enfatiza el papel de la cultura en condicionar las evaluaciones individuales de los objetos políticos, y otro que subraya la importancia de los arreglos institucionales para restringir y canalizar el comportamiento individual. El autor plantea que la variación en el apoyo al régimen es, en parte, consecuencia de una interacción entre valores culturales y arreglos institucionales.

En suma, el artículo argumenta que el apoyo a la democracia se ve afectado por la dimensión de la evaluación económica, las percepciones de corrupción y seguridad, así como la participación política, el respeto por las instituciones y la aprobación presidencial.

Las dimensiones de un debilitamiento democrático: evidencia

Para documentar las tres dimensiones del debilitamiento democrático, el artículo emplea una estrategia metodológica mixta que combina análisis cualitativos y cuantitativos. En primer lugar, se examina la evolución de la libertad de prensa mediante un análisis longitudinal que abarca el período 2006-2025. Este análisis se complementa con el estudio de casos específicos de la administración actual, identificados a través de una búsqueda sistemática en la plataforma "MediaCloud", que permite mapear episodios de tensión entre el gobierno y la prensa.

En segundo lugar, se desarrolla un análisis cualitativo y se construye una narrativa a partir de los procesos judiciales por corrupción que involucran al presidente, así como de los ataques dirigidos hacia las instituciones. Esta aproximación permite evidenciar las estrategias de deslegitimación institucional y confrontación con los mecanismos de control democrático.

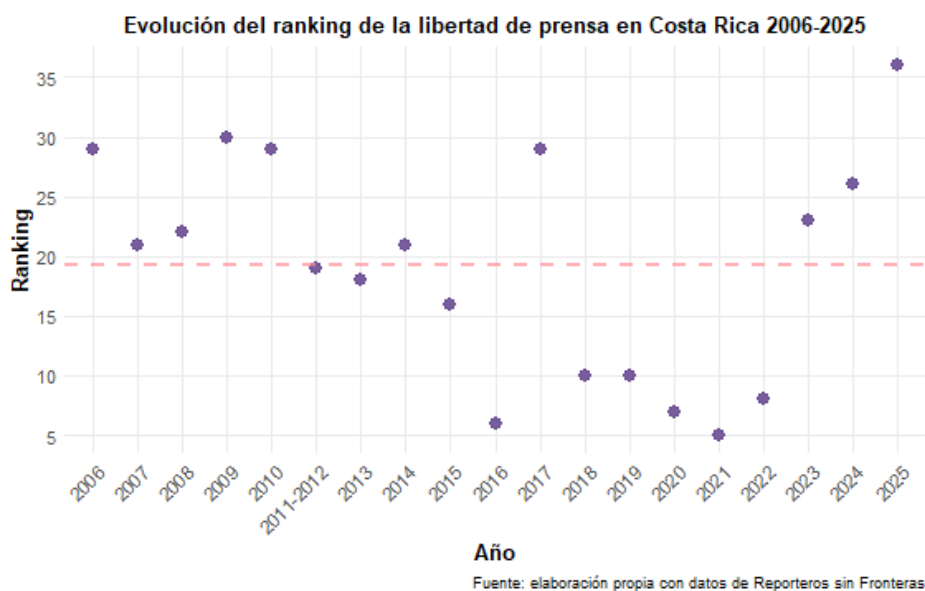
Finalmente, mediante una estrategia cuantitativa, se estima un modelo estadístico para explicar las variaciones en el apoyo ciudadano hacia la democracia durante el período 2006-2025. La selección de este marco temporal obedece a que las elecciones de 2006 marcaron la transición del sistema político costarricense del bipartidismo tradicional hacia un esquema multipartidista, constituyendo un punto de inflexión que reconfiguró la dinámica política nacional y estableció las condiciones estructurales que permiten comprender las transformaciones democráticas contemporáneas.

La libertad de prensa

El gráfico 1 presenta la evolución de la posición de Costa Rica en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, donde una posición más baja en el ranking refleja un mayor nivel de libertad de prensa. Durante el periodo analizado (2006-2025), Costa Rica registró una posición promedio de 19.2 en el ranking.

El análisis temporal revela tres fases: entre 2006 y 2014, el país mantuvo posiciones relativamente estables, oscilando entre el puesto 18 y superiores al 20; durante el periodo 2015-2022 se observó una mejora sustancial en la clasificación, con un retroceso experimentado en 2017 de manera particular. Sin embargo, a partir de 2023 se registra un deterioro pronunciado en el ranking, culminando en 2025 con la posición 36, la más desfavorable en todo el periodo de estudio. Esta tendencia regresiva coincide temporalmente con la llegada al poder de Rodrigo Chaves y su particular aproximación discursiva hacia los medios de comunicación nacionales.

Gráfico 1. Evolución del ranking de la libertad de prensa en Costa Rica 2006-2025



Para evidenciar los ataques del presidente a los medios de comunicación, se realizó una búsqueda sistemática en la plataforma MediaCloud utilizando la siguiente ecuación: "Rodrigo Chaves" AND (ataca OR insulta OR agrede OR ofende OR agravia OR menosprecia OR arremete OR descalifica) AND (prensa OR periodista OR medio OR "medios de comunicación" OR reportero) AND ("Costa Rica" OR "costarricense" OR "ticos"). El período de análisis abarcó desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 4 de septiembre de 2025. Los resultados arrojaron un total de 135 publicaciones, concentradas principalmente en los siguientes medios de comunicación costarricenses: La Nación, La Teja, El País, NCR Noticias, El Financiero y Teletica. La Figura 1 presenta una nube de palabras que visualiza las palabras con mayor frecuencia.

Figura 1. Palabras con mayor número de menciones

chaves rodrigo presidente costa rica prensa arremete gobierno
ccss libertad periodistas parque viva video cisneros asamblea arias diputados
ataca ataques pilar política investigación navas legislativa joselyn chacón diario
francés pln fiscalía discurso cierre gloria expresión ataque violencia diputada país seguridad
contrato fiscal atacar presidenta cartas monde importante destaca llama atención internacional editorial sala
secretario nuevamente medios caso barrenador pierde periodista defiende periodismo peligroso cidh violaciones
derechos nivel campaña andrea álvarez futuro califica tse mujeres decreto indica pide judas judicial abre
municipalidad negociación vea diputadas exigen beligerancia asistir lujo irse ciudadano derecho información marta
esquivel autor piero órdenes díaz directiva proyecto

Fuente: MediaCloud

El análisis de las 135 notas recabadas muestra cómo el presidente Rodrigo Chaves ha desarrollado una estrategia comunicacional caracterizada por ataques sistemáticos contra los medios de comunicación, patrón que se evidenció desde su campaña electoral. Durante la gira previa a la segunda ronda, Chaves manifestó públicamente su intención de "destruir" empresas mediáticas como La Nación y Canal 7 en caso de acceder al poder. Los especialistas en comunicación política han identificado similitudes entre el discurso de Chaves y las estrategias retóricas empleadas por figuras como Donald Trump y Jair Bolsonaro, caracterizadas por la construcción de una narrativa que presenta a la prensa como "canalla y enemiga" del pueblo. Mientras tanto el discurso del oficialismo es que los ataques son un "mito" o que no existe una política sistemática de ataques porque la actividad sigue siendo completamente abierta.

El primer evento ocurrió cuando la administración ordenó el cierre de "Parque Viva", propiedad del Grupo Nación. Posteriormente, durante una conferencia de prensa oficial, el presidente atacó públicamente al periódico utilizando información distorsionada sobre emisiones de bonos corporativos realizadas entre 2013 y 2014, cuestionando la solvencia financiera de la empresa. La dirección ejecutiva del Grupo Nación respondió aclarando que los pagos de intereses se realizaban puntualmente.

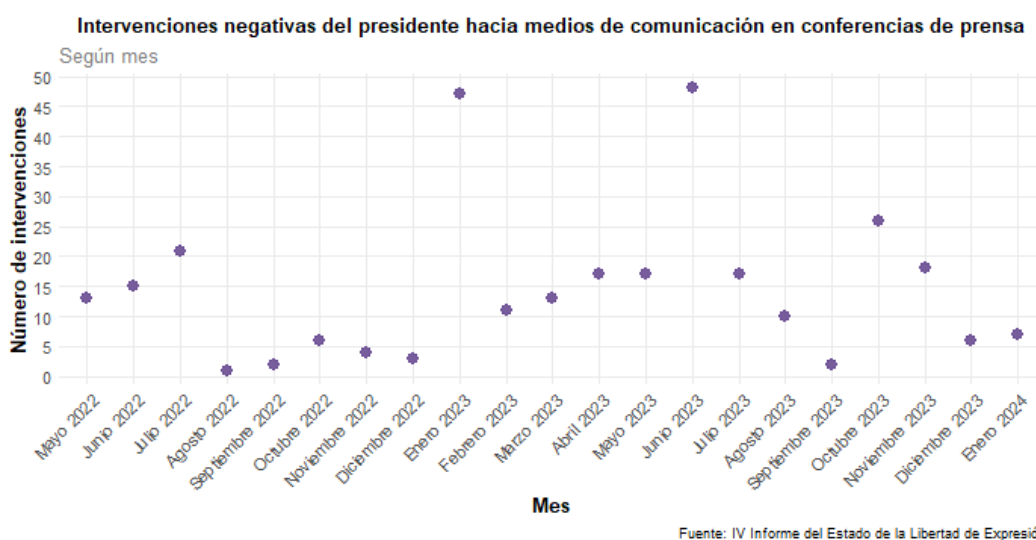
Un segundo caso relevante involucró al perfil falso "Piero Calandrelli" (Alberto Vargas), quien recibía pagos de la ministra de Salud para producir contenido difamatorio contra periodistas y legisladores de oposición. Aunque la diputada oficialista Pilar Cisneros fue señalada como intermediaria en este esquema, negó cualquier vinculación. El presidente respondió a las investigaciones periodísticas acusando a los medios de emplear "sicarios políticos" y calificando las críticas a la ministra como "injustificadas".

Adicionalmente, se han documentado confrontaciones directas con periodistas específicos, como el caso de Danilo Chaves de La Reacción, quien fue interpelado agresivamente por el mandatario tras insinuar desacuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. También se registran críticas sistemáticas contra Teletica, Ignacio Santos, Álvaro Sánchez y Christian Montero, estos últimos por divulgar información de contacto presidencial en redes sociales.

¿Cómo han reaccionado otros actores más allá de la prensa y el oficialismo? La oposición ha caracterizado estos comportamientos como una amenaza democrática, argumentando que la libertad de prensa constituye un mecanismo fundamental para la denuncia de actos de corrupción y el ejercicio de contrapesos institucionales. La Federación Internacional de Periodistas emitió una declaración condenando la violencia contra periodistas en Costa Rica y las restricciones al acceso a la información impuestas por el Ejecutivo.

Desde la ciudadanía, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de 2024 reveló que el 82.4% de las personas desaprueban la actitud presidencial hacia los medios. El mismo organismo determinó que el 99% de las intervenciones de Chaves en conferencias de prensa referidas a periodistas o medios han sido de carácter negativo. Esta tendencia coincide con el análisis de Reporteros sin Fronteras, que identifica un deterioro en las garantías políticas para el ejercicio de la libertad de prensa en el país. El gráfico 2, con información del IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, muestra las intervenciones negativas del presidente hacia los medios según el mes. Se observa que al inicio de la gestión los niveles son bajos o medios bajos. En enero de 2023 y junio de 2023 el número es mucho mayor alcanzando alrededor de 50 intervenciones. Posteriormente los niveles se encuentran en un rango intermedio, oscilando principalmente entre 5 y 25 intervenciones mensuales, con algunas variaciones puntuales como el incremento observado en noviembre de 2023 (alrededor de 26 intervenciones) y una tendencia descendente hacia el final del período analizado, donde en enero de 2024 se registran apenas 2 intervenciones.

Gráfico 2. Número de intervenciones desde mayo 2022 hasta enero 2024



En 2023, la Sala Constitucional emitió una sentencia sin precedentes condenando al presidente por ofensas dirigidas contra la prensa crítica y sectores opositores. Los magistrados determinaron que el mandatario utiliza lenguaje "irrespetuoso y ofensivo" que lesiona la libertad de prensa, constituyendo la primera resolución judicial de esta naturaleza contra un presidente en ejercicio en Costa Rica.

El escrutinio internacional también se ha intensificado. El Departamento de Estado de Estados Unidos elaboró un informe documentando los ataques de Chaves contra la prensa, destacando el incremento en agresiones verbales, acoso y el uso de recursos estatales para castigar a medios críticos. Paralelamente, el diario francés *Le Monde* publicó un análisis señalando que el presidente costarricense "no tolera las críticas periodísticas" y responde a los cuestionamientos acusando a los medios de mantener "intereses económicos o políticos oscuros".

Este patrón de comportamiento representa las formas en que la prensa se ve intimidada por las acciones y retórica del presidente, desmejorando su objetivo principal en un contexto democrático. Además, las acciones del presidente han provocado reacciones de otros actores como la comunidad internacional, la oposición y la ciudadanía.

Deslegitimación institucional

A pesar de que los indicadores de Transparencia Internacional reflejan una estabilidad en los niveles de percepción de corrupción durante el período analizado —oscilando entre 53 y 59 puntos—, la administración presidencial actual ha enfrentado señalamientos y procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción, generando tensiones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de control.

El primer evento involucró un conflicto directo con la Fiscalía General de la República a raíz de la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social por actos de corrupción. La respuesta presidencial caracterizó estas acciones como "abuso de poder" y como una estrategia para "amedrentar al gobierno" (NCR, 2024), evidenciando una postura de confrontación con la institucionalidad.

Un segundo caso corresponde a señalamientos por presunta concusión relacionada con la contratación irregular de servicios de comunicación gubernamental utilizando fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según la investigación del fiscal, el proceso habría sido direccionado para beneficiar al asesor de campaña electoral del mandatario, mediante la redacción específica de requisitos contractuales por parte del prestador de servicios (Murillo, 2025). Esta acusación involucra adicionalmente a otros funcionarios gubernamentales.

El caso más significativo refiere al presunto financiamiento irregular de la campaña electoral presidencial de 2022. La Fiscalía General ha documentado la utilización de estructuras paralelas para el financiamiento, contraviniendo las disposiciones del Código Electoral que establecen la obligatoriedad de canalizar las aportaciones a través de los partidos políticos con plena transparencia. Como consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado el levantamiento de la inmunidad presidencial y de otros funcionarios gubernamentales.

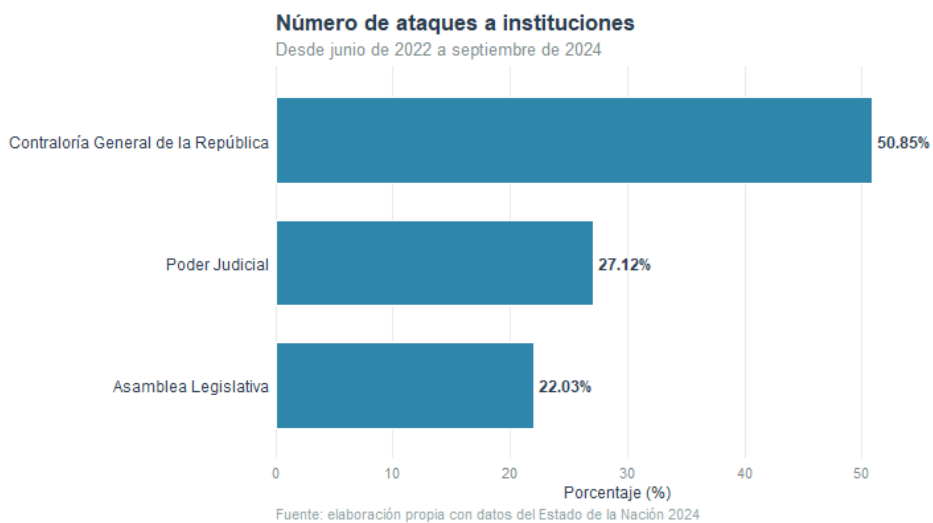
La escalada del conflicto alcanzó dimensiones inéditas cuando el mandatario lideró una manifestación pública contra el fiscal, utilizando calificativos como "matón de barrio", mientras que la autoridad judicial ha señalado que dichas acciones constituyen una amenaza contra la división de poderes (Benavides, 2025). La narrativa presidencial ha enmarcado estos procesos como "persecución política", argumentando su mandato para "cambiar las reglas del juego" (Benavides, 2025).

Además de los casos específicos de corrupción, se observa un patrón sistemático de confrontación con las instituciones de control democrático. La Contraloría General de la República, órgano superior de fiscalización, ha sido objeto de cuestionamientos presidenciales tras señalar irregularidades en procesos del Instituto Costarricense de Electricidad y la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otras entidades públicas (Miranda, 2024).

La contralora general ha manifestado que, si bien la exposición de irregularidades constituye la función histórica de la institución, los ataques actuales presentan una intensidad y magnitud sin precedentes en comparación con administraciones anteriores. Esta perspectiva es corroborada por el expresidente José Figueres, quien identifica un patrón de arremetidas sistemáticas contra el Congreso, el Poder Judicial, las universidades públicas, la Contraloría, la Fiscalía (Quirós, 2024) y el Tribunal Supremo de Elecciones (Rueda, 2025).

En el gráfico 3 se observa que el mayor porcentaje de ataques realizados, corresponde a la Contraloría General de la República en un periodo desde junio de 2022 hasta septiembre de 2024.

Gráfico 3. Ataques a instituciones de la administración de Rodrigo Chaves



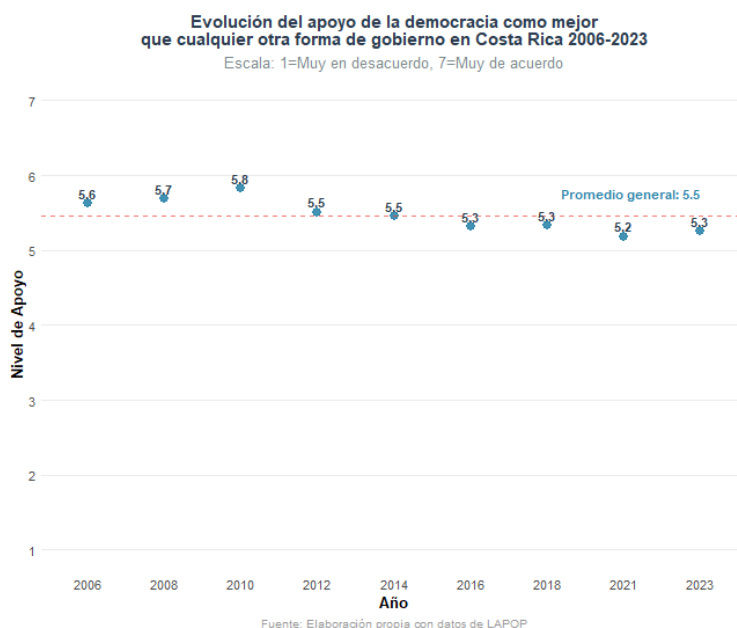
El apoyo ciudadano

Para analizar el declive del apoyo a la democracia, se utilizaron las bases de datos del "Latin American Public Opinion Project" de la Universidad de Vanderbilt, las cuales abarcan los años

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021³ y 2023. Se estimó un modelo de regresión lineal múltiple con efectos fijos por año. Según Wooldridge (2020), la regresión lineal múltiple es un modelo que permite evaluar la relación entre una variable dependiente y múltiples variables explicativas, mientras que los efectos fijos contribuyen a controlar las características no observadas que son constantes en el tiempo dentro de grupos de observaciones. La variable dependiente se basa en la pregunta: "Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?" (escala del 1 al 7).⁴

En el gráfico 4 se observa la evolución de la variable dependiente en el periodo desde 2006 hasta 2023. El promedio general fue de 5.5; sin embargo, a partir de 2016 muestra una ligera disminución. Esta tendencia descendente se ha mantenido desde 2016 hasta 2023, abarcando tres periodos presidenciales (Luis Guillermo Solís, 2014-2018; Carlos Alvarado, 2018-2022 y Rodrigo Chaves 2022-actualidad) caracterizados por la fragmentación del sistema de partidos, la falta de negociación con todos los sectores, el surgimiento de líderes religiosos, la crisis del COVID-19 y el aumento de la inseguridad. Estos fenómenos han generado un contexto de descontento político que pueden influir en la percepción del funcionamiento de la democracia.

Gráfico 4. Apoyo ciudadano de la democracia en Costa Rica, 2006-2007



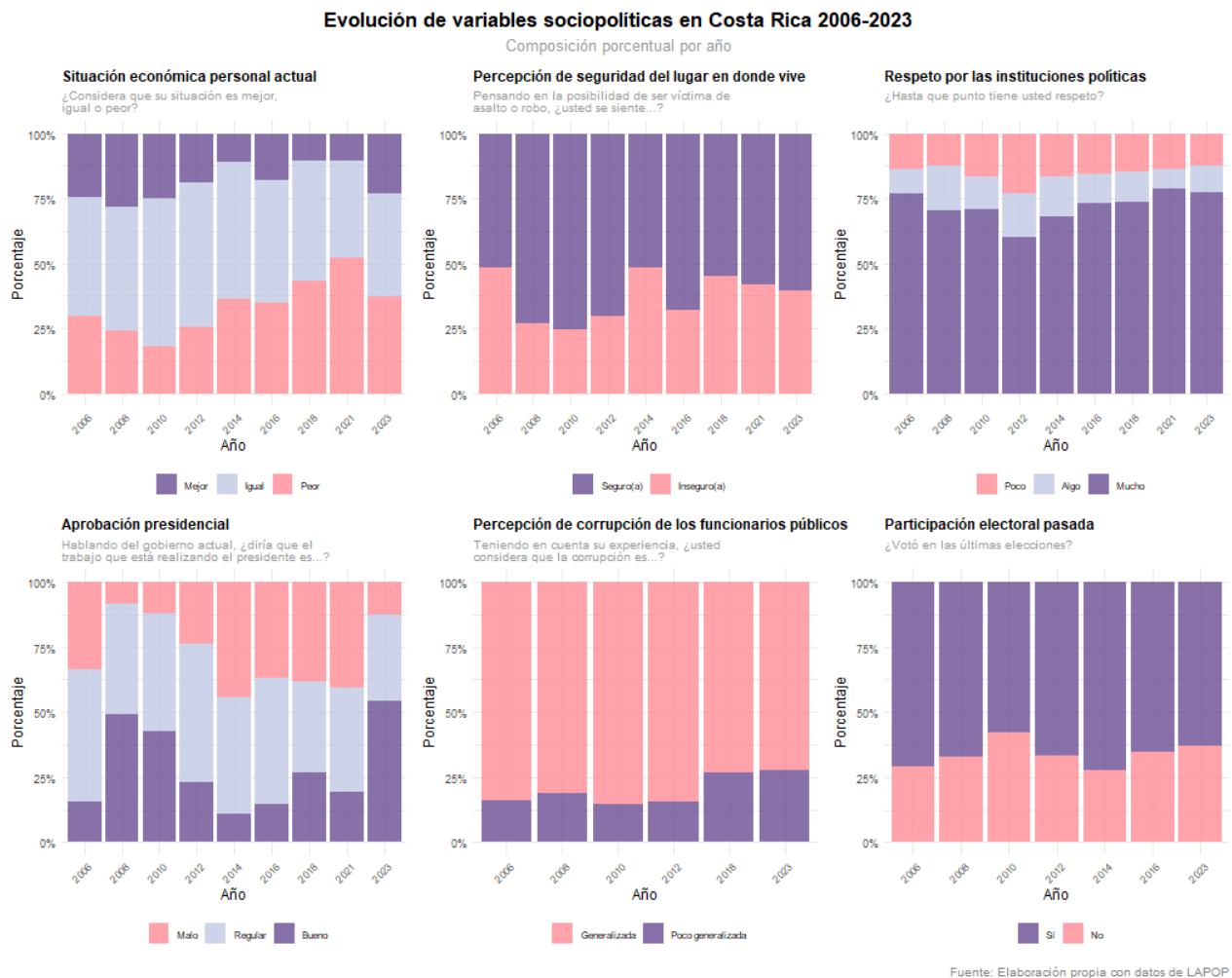
¿Qué explica el descenso del apoyo a la democracia? Como se evidenció en la literatura, el artículo se enfoca en tres tipos de explicaciones. Respecto a la explicación económica, se incorpora la variable "¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?". En la dimensión social se incluyen la variable de percepción de seguridad, medida a partir de la pregunta "Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad

³ Aunque la periodicidad de la encuesta es bianual, debido a la crisis del COVID-19, no se pudo realizar la encuesta en 2020.

⁴ Se tratará la variable como una variable cuantitativa discreta.

de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente seguro o inseguro?", y la percepción de corrupción, evaluada mediante la pregunta "Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está generalizada o no generalizada?". Para la dimensión política se incorporan la variable de participación política mediante la pregunta "¿Votó en la primera ronda de las últimas elecciones presidenciales?"; el respeto por las instituciones a través de la pregunta "¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Costa Rica?" (escala del 1 al 7); y la aprobación presidencial con la pregunta "Hablando del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente es bueno, regular o malo?". El gráfico 5 muestra la evolución de dichas variables en Costa Rica del 2006 al 2023.⁵

Gráfico 5. Percepción de las dimensiones económicas, sociales y políticas en Costa Rica 2006-2023



⁵ La percepción de corrupción no se preguntó en el 2018 ni en el 2021 o se preguntó de manera diferente. La participación política no se preguntó en el 2021.

En la dimensión económica, el gráfico muestra un deterioro gradual de la percepción desde 2012. En términos generales, las personas consideran que su situación económica ha empeorado o se ha mantenido estancada. Es particularmente preocupante que el porcentaje de población que considera que su situación económica ha mejorado (morado) representa menos del 25% del total. Diversos fenómenos macroeconómicos como los bajos salarios, el alto costo de la vida, la inflación y la desigualdad pueden explicar esta percepción. En cuanto a la percepción de seguridad, más de la mitad de la población se siente segura; sin embargo, en 2006, 2014 y 2018, los porcentajes de percepción de seguridad e inseguridad fueron similares. Respecto a la corrupción, un alto porcentaje de la población (75% o más) considera que la corrupción está generalizada en el país.

Respecto a la dimensión política, la variable que presenta mayor variabilidad es la aprobación presidencial. Durante los períodos de 2006, 2014, 2018 y 2021, el porcentaje de población que desaprobaba a los gobiernos osciló entre el 30% y el 50%. Estos años corresponden a administraciones del Partido de Liberación Nacional y, predominantemente, del Partido Acción Ciudadana. Es relevante destacar que con el cambio de gobierno en 2022 y la llegada de Rodrigo Chaves, se observa una mejora sustancial en la aprobación presidencial. Por otro lado, el respeto hacia las instituciones se mantiene en niveles altos, con valores cercanos al 75%, mientras que la participación electoral oscila entre el 60% y el 75%.

A partir de la revisión de literatura, se plantea evaluar las siguientes hipótesis.

1. Cuando la percepción de la situación económica mejora, el apoyo a la democracia aumenta.
2. Cuando la percepción de la seguridad mejora, el apoyo a la democracia aumenta.
3. Cuando la percepción de la corrupción mejora, el apoyo a la democracia aumenta.
4. Cuando el respeto a las instituciones mejora, el apoyo a la democracia aumenta.
5. Cuando la aprobación presidencial mejora, el apoyo a la democracia aumenta.
6. En presencia de participación política, el apoyo a la democracia aumenta.

La tabla 1 presenta los resultados de los modelos estimados. El modelo 1 incorpora efectos fijos por año y todas las variables explicativas, excluyendo la corrupción y la percepción de seguridad. El modelo 2 añade la variable de corrupción e incluye efectos fijos anuales, excepto para los años 2018 y 2021. El modelo 3 incorpora la participación política como variable explicativa y efectos fijos anuales, a excepción del año 2021. Todos los modelos controlan por género, edad, nivel de educación y tipo de localidad. Las categorías de referencia utilizadas son: "Hombre" para género, "Ninguno" para nivel de educación y "Rural" para tipo de localidad.

Tabla 1. Factores económicos, sociales y políticos asociados al apoyo de la democracia en Costa Rica

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Intercepto	5.533*** (0.137)	5.651*** (0.170)	5.733*** (0.145)
Situación económica			
Igual	0.033 (0.041)	0.047 (0.049)	0.010 (0.043)
Peor	-0.069	-0.142***	-0.059

	(0.045)	(0.055)	(0.048)
Percepción de seguridad. Inseguro	-0.103*** (0.033)	-0.114*** (0.041)	-0.106*** (0.035)
Corrupción. Poco/nada generalizada		-0.102** (0.049)	
Aprobación presidencial			
Regular	-0.204*** (0.038)	-0.177*** (0.045)	-0.176*** (0.041)
Malo	-0.245*** (0.045)	-0.241*** (0.058)	-0.179*** (0.050)
Respeto por instituciones			
Algo	-0.456*** (0.046)	-0.423*** (0.058)	-0.458*** (0.050)
Poco	-0.580*** (0.044)	-0.531*** (0.055)	-0.577*** (0.047)
No votó en las últimas elecciones			-0.275*** (0.036)
Mujer	-0.081*** (0.031)	-0.077** (0.038)	-0.099*** (0.033)
Edad	0.006*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.005*** (0.001)
Educación			
Posgrado	1.650 (1.153)	1.700 (1.180)	1.509 (1.157)
Primaria	0.097 (0.117)	0.087 (0.150)	0.040 (0.124)
Secundaria	0.241** (0.118)	0.148 (0.151)	0.160 (0.125)
Universidad	0.636*** (0.122)	0.557*** (0.155)	0.515*** (0.129)
Localidad. Urbana	-0.037 (0.033)	-0.048 (0.041)	-0.041 (0.035)

Errores estándar entre paréntesis, $p < 0.001$ ***, $p < 0.05$ ** , $p < 0.1$ *

Los resultados son diversos. La variable de situación económica no representa resultados robustos ya que solamente es estadísticamente significativa en el modelo dos: cuando la percepción de la situación económica es peor, con respecto a mejor, disminuye el apoyo a la democracia. En cuanto a las variables sociales, en el modelo 3 se observa que una percepción de inseguridad, con respecto a sentirse segura, disminuye el apoyo a la democracia, lo que respalda la hipótesis. Sin embargo, el considerar que la corrupción es poco o nada generalizada con respecto a muy generalizada, también disminuye el apoyo a la democracia, lo cual es contrario a la hipótesis.

En relación con las variables políticas, una aprobación presidencial mala o regular —en comparación con una aprobación buena— provoca una disminución del apoyo a la democracia. De manera similar, el respeto por las instituciones en sus categorías de "algo" y "poco", frente a

"mucho", también genera una disminución del apoyo a la democracia. Asimismo, no participar en la última elección —en contraste con participar— tiene un efecto negativo sobre el apoyo a la democracia. Estos hallazgos respaldan consistentemente las hipótesis planteadas.

Finalmente, las variables de control también presentan resultados heterogéneos. Ser mujer —en comparación con ser hombre— se asocia con una disminución en el apoyo a la democracia. Por el contrario, conforme aumenta la edad, el apoyo a la democracia se incrementa. Las variables de educación y localidad no presentan resultados robustos; la única excepción es contar con estudios universitarios que, en relación con ninguna escolaridad, se asocia positivamente con el apoyo a la democracia.

Discusión

Los resultados de las estrategias cualitativas y cuantitativas arrojan algunos aspectos interesantes sobre el gobierno de Chaves, pero también sobre el proceso de descenso en el apoyo democrático. En cuanto a la libertad de prensa, la caída en el ranking internacional evidencia que los ataques van más allá del discurso y crean condiciones que restringen el trabajo periodístico. Este deterioro confirma la propuesta de Van Belle sobre la necesidad de un "ambiente de seguridad" para que los comunicadores puedan cuestionar a las élites políticas. La narrativa que caracteriza a la prensa como "enemiga del pueblo" o "prensa canalla" mina funciones democráticas identificadas por Cook, particularmente la rendición de cuentas.

No obstante, el caso costarricense expone dinámicas que el marco teórico propuesto no termina de capturar. Las tácticas empleadas combinan ataques públicos, operaciones de desinformación y presiones económicas indirectas, lo que indica que las "obstrucciones" actuales operan mediante mecanismos más elaborados que la censura tradicional o la violencia directa. La reacción ciudadana revela una contradicción: aunque el 82.4% rechaza los ataques presidenciales contra los medios, Chaves accedió al poder precisamente empleando esta retórica anti-mediática. Esta dinámica indica que la hostilidad hacia la prensa puede generar réditos electorales a corto plazo, pero producir un desgaste gradual en el apoyo público.

Con respecto a la deslegitimación institucional, la evidencia muestra que Rodrigo Chaves es un líder que se esfuerza por atacar las instituciones y no se nutre de la crítica constructiva propia del debate democrático. El conflicto con el Poder Judicial —específicamente la Fiscalía General— y con la Contraloría General, además de sus ataques, muestran que son instituciones que poseen mayor capacidad de control y de veto sobre las decisiones ejecutivas. Por otro lado, la respuesta presidencial a los casos de corrupción ejemplifica lo que Recio y Vidal denominan "instrumentalización": el presidente Chaves en lugar de colaborar, tilda los procesos como "persecución política" y "abuso de poder".

Además, la narrativa presentada evidencia que el conflicto escala desde la confrontación retórica hasta la movilización contra el fiscal. Liderar una manifestación contra la autoridad judicial y utilizar calificativos como "matón de barrio" representa una innovación en el repertorio autoritario (Monsivais, 2023) que va más allá de los ataques verbales tradicionales.

El contraste entre la estabilidad en los índices de Transparencia Internacional (53-59 puntos) y la intensidad de los conflictos institucionales sugiere una desconexión entre la percepción ciudadana y realidad institucional. La evidencia plantea interrogantes sobre la capacidad de resistencia de las instituciones democráticas cuando enfrentan ataques coordinados desde el poder ejecutivo. La deslegitimación institucional indica que el sistema costarricense, tradicionalmente estable, experimenta tensiones inéditas.

Con respecto a los resultados del modelo estadístico, también arrojan hallazgos interesantes. La variable económica muestra resultados inconsistentes (significativa solo en el modelo 2), lo que contradice parcialmente la literatura sobre la importancia del desempeño económico para el apoyo democrático. Esto podría reflejar que, en Costa Rica, las expectativas ciudadanas sobre la democracia van más allá de la evaluación económica.

La percepción de inseguridad efectivamente reduce el apoyo democrático, confirmando la hipótesis. Sin embargo, el hallazgo más problemático es que considerar la corrupción como "poco generalizada" también disminuye el apoyo a la democracia. Este resultado contraintuitivo requiere reinterpretación: podría indicar que en un contexto donde la corrupción es percibida como endémica (alrededor del 75% considera que está generalizada) no hay grandes diferencias.

Los resultados sobre la dimensión política son robustos. La aprobación presidencial, el respeto por las instituciones y la participación electoral muestran relaciones consistentes con el apoyo democrático. Esto es particularmente relevante considerando las estrategias de deslegitimación institucional de Chaves documentadas anteriormente. La mejora en la aprobación presidencial de Chaves (comparada con administraciones previas) presenta una paradoja: mientras implementa estrategias que erosionan las instituciones democráticas, mantiene apoyo ciudadano que, según el modelo, debería traducirse en mayor apoyo a la democracia. Esto sugiere que las estrategias o el comportamiento populista de Chaves puede generar apoyo y que hay otras variables -no tomadas en cuenta- como la polarización política que podrían estar moderando esta relación.

Conclusión

El artículo ha argumentado que Costa Rica experimenta una "democracia en tensión" más que una erosión democrática, caracterizada por el deterioro en tres dimensiones fundamentales: la libertad de prensa, la legitimidad institucional y el apoyo ciudadano a la democracia. La evidencia analizada confirma que, si bien el sistema democrático costarricense mantiene su estructura institucional, enfrenta presiones inéditas.

En el ámbito de la libertad de prensa, los hallazgos revelan que los ataques presidenciales contra los medios de comunicación han generado un deterioro medible en los índices internacionales, confirmando que estas agresiones trascienden la retórica para crear condiciones objetivamente restrictivas del ejercicio periodístico. La evidencia expone una paradoja: mientras el 82.4% de la ciudadanía rechaza explícitamente los ataques mediáticos, la retórica anti-prensa constituyó un elemento central de la campaña electoral de Chaves y posiblemente contribuyó a su victoria. Esta contradicción sugiere que sugiere que las estrategias las estrategias hostiles hacia los medios pueden generar réditos políticos a corto plazo, pero erosionar gradualmente el apoyo público.

La deslegitimación institucional también revela patrones interesantes. Los conflictos con el Poder Judicial y la Contraloría General, junto con la movilización contra autoridades judiciales, representan formas de repertorios autoritarios que se diferencian de los ataques verbales convencionales. La instrumentalización de los procesos de corrupción como "persecución política" evidencia una estrategia de debilitamiento institucional que, no obstante, coexiste con indicadores de transparencia relativamente estables.

Los resultados del análisis estadístico sobre el apoyo democrático arrojan hallazgos mixtos. La inconsistencia de la variable económica sugiere que las expectativas ciudadanas sobre la democracia trascienden la evaluación del desempeño económico. Además, la paradoja identificada entre la mejora en la aprobación presidencial de Chaves y el discurso que implementa indica que el comportamiento populista puede mantener apoyo ciudadano.

La conceptualización de Costa Rica como una "democracia en tensión" permite capturar dinámicas que escapan a las categorías tradicionales de erosión democrática. A diferencia de los casos donde la autocratización procede mediante reformas constitucionales o capturas institucionales directas, el caso costarricense muestra un patrón de deterioro que opera a través de presiones constantes, pero no definitivas sobre el sistema democrático. La categoría "democracia en tensión" ofrece un marco analítico para comprender sistemas políticos que experimentan presiones autoritarias sin colapsar institucionalmente.

Finalmente, los resultados sugieren que la estabilidad democrática de Costa Rica no garantiza inmunidad ante las presiones autoritarias. El caso plantea interrogantes centrales sobre la capacidad de resistencia de las instituciones democráticas cuando enfrentan ataques coordinados desde el poder ejecutivo, así como sobre los mecanismos que permiten el mantenimiento de altos niveles de aprobación presidencial a pesar de la implementación de estrategias características del liderazgo populista.

Referencias

Alfaro-Redondo, R., Seligson, M. y Zechmeister, E. (2014). *Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas*. Programa Estado de la Nación.

Alfaro-Redondo, R. (2023). Costa Rica: Tensions and uncertainty in Latin America's most stable democracy. En H. F. Kline y C. J. Wade (Eds.), *Latin American politics and development* (10ª ed., pp. 382-398). Routledge.

Alister, C., Cea, C., & Guerrero, A. (2015). Democracia en Latinoamérica, ¿Qué factores influyen en la satisfacción y apoyo a la Democracia? *Fronteras-ISSN 0719-4285*, 2(1), 85-113.

Almeida, T. R., & Casalecchi, G. A. (2025). When is corruption a threat to democracy? Perception of corruption about politicians and bureaucrats and democratic legitimacy in Latin America. *Revista Brasileira de Ciência Política*, 44.

Amri, P. D. (2023). How Do Economic Conditions Influence Support for Democracy?. *Muslim Politics Review*, 2(1), 88-111.

- Benavides, H. (2025, 25 de junio). Chaves responde con ataque político a nueva acusación de la Fiscalía en Costa Rica. *CB24*. <https://cb24.tv/2025/06/25/fiscalia-acusa-rodrigo-chaves-costa-rica/>
- Booth, J. A. y Seligson, M. (2009). *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Democracy and Political Support in Eight Nations*. Cambridge University Press.
- Brown Araúz, H., & Casullo, M. E. (2023). Democratización y neopatrimonialismo: ¿hay una ola populista en Centroamérica?. *Revista mexicana de sociología*, 85(SPE2), 95-122.
- Carlin, R. (2006). The socioeconomic roots of support for democracy and the quality of democracy in Latin America. *Revista de Ciencia Política*, 26(1), 48-66.
- Carlin, R. E., Hartlyn, J., Hellwig, T., Love, G. J., Martínez-Gallardo, C., & Singer, M. M. (2018). Public support for Latin American presidents: The cyclical model in comparative perspective. *Research & Politics*, 5(3), 2053168018787690.
- Cascante, M. J., y Guzmán, J. (2022). Reconfiguraciones políticas en Costa Rica: Del bipartidismo a la fragmentación. *Nueva Sociedad*, 300, 127-139.
- Cascante, M. J., y Lara, M. (2020). Intolerancia y desafección: transformaciones en el sistema de partidos en Costa Rica, 1953-2018. En S. Mantilla Baca (Ed.), *Los partidos políticos en América Latina: ideología y estructura de la competencia* (pp. 227-253). Centro Latinoamericano de Estudios Políticos CELAEP.
- Cascante, M. J., y Muñoz, J. M. (2023). Costa Rica: el multipartidismo y su efecto en el crecimiento de discursos populistas. En M. E. Casullo y H. Brown Araúz (Coords.), *El populismo en América Central: la pieza que falta para comprender un fenómeno global* (pp. 67-94). Siglo XXI Editores.
- Casas-Zamora, K. (2024). Is Costa Rica Different? Democracy and Its Challenges in a Regional Context. *ReVista (Cambridge)*, 23(3), 1-29.
- Craft, S. (2010). Press freedom and responsibility. En C. Meyers (Ed.), *Journalism ethics: A philosophical approach* (pp. 39-53). Oxford University Press.
- Del Tronco, J., & Monsiváis-Carrillo, A. (2020). La erosión de la democracia. *Revista de Estudios Sociales*, (74), 2-11.
- Easton, D. (1953) "The Political System. An Inquiry into the State of political science", Working Paper de Kellog Institute for International Studies, New York.
- Fiss, O. M. (1996). *The irony of free speech*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fitriana, R. T., Hidayat, M. A., & Firdaus, S. U. (2023). The Role of the Press in Democracy. In *International Conference for Democracy and National Resilience 2022 (ICDNR 2022)* (pp. 101-108). Atlantis Press.
- Garro Rojas, L., & Solís Solís, L. (2022). Inseguridad y precarización: riesgos en el ejercicio del periodismo en Costa Rica. En III Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica del 2022 (pp. 135-173). PROLEDI & CICOM. <https://proledi.ucr.ac.cr/iii-informe-del-estado-de-la-libertad-de-expresion-en-costa-rica/>
- Kenny, P. D. (2020). "The enemy of the people": Populists and press freedom. *Political Research Quarterly*, 73(2), 261-275.

- Kim, H. H. S. (2014). Generalised trust, institutional trust and political participation: A cross-national study of fourteen Southeast and Central Asian countries. *Asian Journal of Social Science*, 42(6), 695-721.
- Köker, P., Swalve, T., Huber, M., Hönnige, C., & Nyhuis, D. (2025). Populists before power: delegitimization strategies against independent judiciaries. *Democratization*, 1-18.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism, revised and updated 4th edition: What newspeople should know and the public should expect*. Crown.
- Laebens, M. G., & Lührmann, A. (2023). What halts democratic erosion? The changing role of accountability. In *Resilience of Democracy* (pp. 40-60). Routledge.
- Lührmann, A. (2021). Disrupting the autocratization sequence: towards democratic resilience. *Democratization*, 28(5), 1017-1039.
- Malone, M. (2010). Does Crime Undermine Public Support for Democracy? Evidence from Central America and Mexico. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1668789> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1668789>
- Martínez de Lemos, F. J., & Rodríguez López, J. (2022). *Primer informe del estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica*. <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/items/e21f5203-8738-43fd-9c8b-397b3b83f4e9>
- Méndez-Castellanos, F. J. (2025). Deterioro de la institucionalidad democrática y conflicto entre los poderes de la República de Costa Rica en la administración de Rodrigo Chaves Robles en el año 2024. *Temas de Nuestra América Revista de Estudios Latinoamericanos*, 41(78), 1-24.
- Miranda, H. (2024, 19 de enero). 'Ha habido un gran irrespeto a la institucionalidad costarricense', señala contralora en medio de acusaciones de Chaves contra CGR. *Radio Universidad de Costa Rica*. <https://radios.ucr.ac.cr/2024/01/interferencia/destacada/institucionalidad-contralora/>
- Monsiváis Carrillo, A. (2023). Populismo, repertorios autoritarios y subversión de la democracia. *Revista mexicana de sociología*, 85(SPE2), 11-38.
- Mora, S., Solís, M y Soto, L. (2014). Entre el apoyo a la democracia y el autoritarismo en Costa Rica. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 37-60.
- Morales Quiroga, M. (2009). Corrupción y democracia: América Latina en perspectiva comparada. *Gestión y política pública*, 18(2), 205-252.
- Moreno Morales, D., & Osorio Michel, D. (2022). ¿ Legitimidades fragmentadas? Apoyo a la democracia en la región andina. *Colombia Internacional*, (110), 51-88.
- Murillo, A. (2025, 8 de abril). Así se materializó el plan delictivo de Chaves con dinero del BCIE, según la Fiscalía. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/asi-se-materializo-el-plan-delictivo-de-chaves-con-dinero-del-bcie-segun-la-fiscalia/>
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Ovares-Sánchez, C. (2021). Déficit democrático en Costa Rica (1998-2019). En L. Rocío Duarte-Recalde & A. L. Coelho (Eds.), *Nuevas tensiones de las democracias en América Latina* (pp. 90-122). Lemos Mídia Editora.

- Peralta, J. S. (2013). Do Culture and Institutions Matter? Explaining the Sources of Cross-National Regime Support. *Politics & Policy*, 41(4), 479-508.
- Pignataro, A., Treminio, I., & Chavarría-Mora, E. (2021). Democracia, apoyo ciudadano y nuevas generaciones frente al retroceso democrático en Centroamérica. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 47, 419-450.
- Pruitt Santos, G. M. (2024). The role of social media in political communication: how alternative journalists illuminate information in Central America's declining democracies. *Atlantic Journal of Communication*, 32(4), 572-587.
- Quirós, B. (2024, 12 de octubre). Figueres: "Este es el primer Gobierno en la historia que arremete contra la institucionalidad democrática". *CRHoy*. <https://www.crhoy.com/figueres-es-el-primer-gobierno-en-la-historia-que-arremete-contra-la-institucionalidad-democratica/>
- Recio, A., & Vidal, C. (2023). La estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas por los populismos. *Gaceta sindical: reflexión y debate*, 41, 151-166.
- Redacción NCR. (2024, 27 de septiembre). ¡Explosivo! Presidente Chaves arremete contra la Fiscalía por caso Barrenador. *NCR Noticias*. <https://ncrnoticias.com/nacionales/explosivo-presidente-chaves-arremete-contra-la-fiscalia-por-caso-barrenador/>
- Reporteros sin Fronteras. (2025). *Índice de libertad de prensa*. Disponible en: <https://rsf.org/es/clasificacion?year=2025>
- Rueda, A. (2025, 25 de junio). ¡Se armó! TSE responde a ataque de Chaves y le recuerda sus elogios del pasado. *AM Prensa*. <https://www.amprensa.com/2025/06/se-armo-tse-responde-a-ataque-de-chaves-y-le-recuerda-sus-elogios-del-pasado>
- Salinas, E., & Booth, J. A. (2011). Micro-social and contextual sources of democratic attitudes in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 3(1), 29-64.
- Schiumerini, L., & Lupu, N. (Ed.). (2021). El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina (Número 8). LAPOP. Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Sendra, M., & Bohigues, A. (2023). Presidential approval, tolerant attitudes, and economic performance: The case of Latin America. *Political Studies Review*, 21(4), 662-679.
- Söderberg, L., & Schumacher, A. (2022). *The strategies and consequences for harassment: The effect on women journalists' work in Costa Rica* [Tesis de licenciatura, Linnaeus University]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1733931/FULLTEXT01.pdf>
- Treminio, I. y Pignataro, A. (2015). Jóvenes y democracia: Comportamiento electoral y actitudes políticas en Costa Rica. *Revista de Derecho Electoral*, (20), 11.
- Tsui, L. (2015). The coming colonization of Hong Kong cyberspace: government responses to the use of new technologies by the umbrella movement. *Chinese Journal of Communication*, 8(4), 1-9.
- Universidad de Costa Rica, PROLEDI, & CICOM. (2024). *IV Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica* (4.ª ed.). https://proledi.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/09/Cuarto-Informe-del-Estado-de-la-Libertad-de-Expresio%CC%81n-en-Costa-Rica_Fe-de-erratas-1.pdf
- Van Belle, D. A. (2000). Press freedom and global politics. Bloomsbury Publishing USA.

Vargas, J. P., & Muñoz, L. B. (2012). La libertad de prensa en América Latina. *Revista " Cuadernos Manuel Giménez Abad"*, (3), 92-104.

Waisbord, S. (2020). Repensar la prensa en las democracias latinoamericanas. En W. Hernández (Ed.), *La comunicación pública en Iberoamérica I: Conferencias de las cumbres iberoamericanas de comunicadores* (pp. 235-248). Fundación Interamericana de la Comunicación.

Wiggins, J. R. (1942). The Function of the Press in a modern democracy. *Journalism Quarterly*, 19(2), 159-171.

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.